

Consolidar la perspectiva de la solución política

[Jairo Estrada Álvarez

A dos años de iniciado el proceso de diálogos y negociación entre la guerrilla de las FARC-EP y el gobierno de Santos existen razones suficientes para pensar que la perspectiva de la solución política del conflicto social y armado tiene la posibilidad de consolidarse. Tal perspectiva se viene abriendo paso en medio de todo tipo de obstáculos.

En primer lugar, enfrentando el férreo bloque opositor de la derecha neofalangista, encabezado por el senador Uribe Vélez y el Procurador Ordoñez. Dicho bloque se ha dado a la tarea de sabotear sistemáticamente el proceso a través de los más variados artilugios, a los cuales los caracteriza un común denominador: la manipulación de la opinión a través de la mentira organizada. Su propósito principal consiste en generar la ruptura del proceso y llevar al país por la senda única de la guerra. Aunque este sector tiene una indiscutible capacidad de daño, posee influencias en la institución y militar y en algunos medios de comunicación convertidos en sus cajas de resonancia, no es conveniente sobrevalorar dicha capacidad. Su actuar desesperado es una demostración de su declive, que se vería acentuado en el escenario de un eventual acuerdo final, y también de la preocupación de sectores de las clases dominantes por la potencia transformadora que éste pueda desatar. De ello dan cuenta “Las 52 capitulaciones de Santos en La Habana” del Centro Democrático, a las que luego se le agregaron otras 16, así como su accionar cotidiano obsesivo y compulsivo.

En segundo lugar, se encuentran las aparentes ambivalencias del gobierno de Santos, que parecen ser más bien expresivas de su estrategia de negociación. Al tiempo que se presenta como el Presidente de la paz y con disposición reformadora, mantiene en su equipo de gobierno liderazgos que proyectan la continuidad de la guerra, como es el caso de su Ministro de Defensa. De la misma forma que suscribe avances en la Agenda de negociación, les resta importancia o los minimiza, o los desvirtúa en los hechos, como en el caso del proyecto de ley de regulación de baldíos que se tramita actualmente en el Congreso. Y está por verse la “revolución de la paz” anunciada con el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo. Además de ello, está la persistencia en negociar en medio de la guerra y el empeñamiento en renunciar a la posibilidad de un cese bilateral de fuegos. Los cuatro razones para no hacerlo, esgrimidas recientemente, son débiles y fácilmente controvertibles. En realidad, tras ellas se esconde la idea de asestar golpes militares que debiliten la capacidad de negociación del contendor en la Mesa y presionen un más rápido acuerdo. Tal apreciación está alejada de las realidades de la guerra, que vienen demostrando que la insurgencia no está en proceso de desmoronamiento y, por el contrario, preserva el potencial de su accionar militar.

En tercer lugar se debe mencionar la aún débil apropiación social del proceso de diálogos y negociación. Sin desconocer la importancia de múltiples esfuerzos e iniciativas impulsados desde el campo popular, todavía no ha sido posible que la perspectiva de la solución política y la paz con justicia social tengan los alcances de un



movimiento de masas, con capacidad de reacción y movilización frente a los continuos embates del proceso. Es amplio el espectro de razones para ello: van desde la insuficiente comprensión del significado histórico de los diálogos, pasan por la existencia de múltiples agendas políticas con muy variadas prioridades y entendimientos del momento político, incluyen el cálculo de los partidos y las organizaciones políticas, algunas de las cuales, como en el caso de la coalición de gobierno, se encuentran sometidas a las definiciones presidenciales, y también aquellas provenientes de la producción de opinión pública por parte de los medios de comunicación, que siguen concibiendo y promueven una idea de negociación bajo la lógica del sometimiento de las fuerzas guerrilleras.

A ello se agregan hechos, que sin tener la suficiente fuerza, proyectan en todo caso la idea equivocada de una fragilidad del proceso, haciéndolo depender de los efectos desencadenantes que pueden tener las contingencias. Tal ha sido el muy extraño caso que condujo a la retención del general Alzate, comandante de una Fuerza de Tarea Conjunta que opera en el Chocó, la cual alcanzó a poner en vilo el proceso por la decisión unilateral del Gobierno de suspender los diálogos. De este hecho, una vez se tengan las informaciones ciertas acerca de las razones de la presencia del mencionado General en una zona de control guerrillero, deberán sacarse las lecciones correspondientes. Una es evidente entre tanto: negociar en medio de la guerra, no solo afecta la buena salud del proceso, sino que lo puede poner en peligro en forma innecesaria. Si se persiste en esa idea, no debe descartarse que en el futuro se presenten situaciones no planeadas ni previstas por quienes se encuentran sentados negociando.

Para fortuna del país y del proceso, frente a la circunstancia presentada primó la sindéresis y la voluntad de encontrarle una pronta salida al episodio. Al salirse de él, como todo lo indica, saldrá fortalecida la Mesa de La Habana. Habrá quedado en evidencia la insensatez de quienes alcanzaron a expresar alegría y alborozo por la posibilidad de una ruptura; se mostrarán una vez más los límites de la estrategia gubernamental de la ambivalencia. En el campo popular, se afianzará la idea de consolidar un gran movimiento en defensa del proceso y de la solución política, lo cual incluye dentro de las prioridades de su agenda la movilización social por el cese bilateral de fuegos. En lo inmediato, pactar un desescalamiento bilateral del accionar militar será un primer paso en la dirección que espera el país. Fortalecer la perspectiva de la solución política que abrieron los diálogos de La Habana se encuentra al orden del día. **IZO**